

**CONGRESO NACIONAL**  
**CAMARA DE SENADORES**  
**SESIONES ORDINARIAS DE 2004**  
**ANEXO I AL ORDEN DEL DIA N° 775**

Impreso el día 10 de agosto de 2004

**SUMARIO**

**COMISION DE MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES; DE  
LEGISLACION GENERAL Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y  
MUNICIPALES**

**Dictamen en minoría** en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la Empresa Energía Argentina Sociedad Anónima. **SE ACONSEJA SU RECHAZO.**(PE-207/04)

**DICTAMEN DE COMISION**  
(en minoría)

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Minería, Energía y Combustibles, Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales han considerado el Proyecto de Ley PE 207/04, y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan su rechazo.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del H. Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al Orden del Día.

Sala de Comisiones, 9 de agosto de 2004.

Ricardo Gómez Díez

**FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN**

Señor Presidente:

No hay una política energética clara por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que permita avizorar cómo de manera efectiva se van a

concretar las inversiones necesarias para atender el crecimiento de la demanda energética.

La cuestión no es menor, ya que la crisis de este año le costó al Estado cerca de 2.300 millones de pesos, importándose gas y combustible para generación eléctrica.

La Resolución nº 712 de la Secretaría de Energía de la Nación, dictada el 12 de julio de este año, reconoce expresamente en sus considerandos la falta de capitales de riesgo en el sector, a los efectos de asegurar el abastecimiento de gas a centrales de generación eléctrica en el año 2.006 y aumentar la capacidad de generación y transporte de energía eléctrica a partir del año 2.007, señalando que si la infraestructura se mantiene estancada puede sobrevenir desabastecimiento.

Si éste es el diagnóstico del propio Poder Ejecutivo ¿Cuál es la política para el sector energético?

¿Cree el Poder Ejecutivo que las privatizaciones de YPF, Agua y Energía, Segba, Hidronor, etc, fueron un fracaso? ¿Hay que recrear las empresas estatales?

¿Cuál es el punto de equilibrio entre el Estado y el capital privado?

¿Por qué está ausente un debate esclarecedor?

La Argentina fue capaz de atraer capitales de riesgo e incrementar la capacidad de generación en un 70%, con reducción de tarifas a usuarios finales. ¿Por qué no copiamos los aciertos, sin repetir los errores?

¿Por qué se detuvo la inversión? ¿Cuál es la razón por la que dejamos de ser confiables?

¿Se soluciona el problema con la creación de una empresa como ENARSA? ¿Se pretende copiar aciertos o profundizar errores?

La cuestión va más allá de la creación de una sociedad, porque constituye una realidad compleja que hay que resolver.

En este sentido es necesario profundizar el debate para que la sociedad decida la mejor política energética.

Tal como se presenta el proyecto es en realidad un mal “parche” que refleja el grado de improvisación que existe en nuestro país.

En efecto, falta un plan estratégico para el sector energético, no hay reglas claras y por eso no hay inversión. La creación de una empresa multipropósito como ENARSA no resuelve el problema, porque la magnitud de los recursos que se requieren en concepto de capital de riesgo supera la capacidad del propio Estado.

Formulo estas reflexiones porque los recursos del Estado son escasos y hay que invertirlos bien. Siempre que se destinan fondos para cumplir una finalidad se restan de algún lado. Por eso las prioridades deben ser racionales y tener en cuenta el interés de la gente.

Si tuviéramos un plan estratégico y el mismo contemplara una sociedad estatal, de todas maneras deberíamos respetar las reglas vigentes.

Cuando se constituye una sociedad, se deben acatar las normas en cuanto al tipo social de que se trata, designar el objeto que debe ser

preciso y determinado, cumplir las leyes que regulan la actividad y fijar el monto del capital.

¿Se cumplen estas reglas en el proyecto de ley de creación de ENARSA?. Examinemos la cuestión.

En cuanto al tipo social, sin duda se trata de una “Sociedad con Participación Estatal Mayoritaria” prevista en el Capítulo II Sección VI de la Ley nº 19.550 de Sociedades.

El artículo 308 de la Ley 19.550, que regula a las mismas, es claro al respecto: “Quedan comprendidos en esta Sección las sociedades anónimas que se constituyan cuando el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean propietarias en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.”

Pese a disposición tan clara, el proyecto categoriza indebidamente a ENARSA como una “Sociedad Anónima”, es decir, sujeta la empresa a las disposiciones del Capítulo II, Sección V de la ley 19.550, que regula este tipo societario.

Atento a que la participación estatal en la empresa que se busca crear es del sesenta y cinco por ciento, la inclusión en el tipo societario “Sociedad Anónima” (Capítulo II – Sección V) es totalmente forzada, correspondiéndole en realidad la tipología “Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria” (Capítulo II – Sección VI).

¿Por qué no se respeta la Ley de Sociedades?

La observación realizada no es menor. Está en juego una cuestión elemental, que es la del control. Mediante esta asignación de una naturaleza no contemplada en la Ley de Sociedades, se detrae a la empresa ENARSA de las disposiciones de la ley 24.156, de Administración Financiera del Estado, y por ende de sus mecanismos de control. El artículo 8º, inc. d) de la ley citada estipula que la misma será aplicable a las “Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria”.

En lo que hace al objeto de la sociedad, si la idea es que el Estado realice actividad empresarial para influir como actor en el mercado, deben respetarse las reglas que organizan la actividad es decir el marco regulatorio vigente. No se puede pasar por alto que ese marco regulatorio, en el caso de la energía, es el que ha hecho posible la concurrencia de enormes inversiones en el sector, sin subsidios por parte del Estado.

Este espíritu de respeto de los marcos regulatorios no es el que rige el proyecto. Desde su primer artículo, al definirse el objeto social de la empresa, se establece una importante excepción o privilegio en favor de ésta, ya que se le confieren en forma conjunta los roles de generador, transportista, distribuidor y comercializador del más amplio rango de bienes energéticos. Esta característica la distingue, desde el primer momento, entre las demás empresas actuantes en el sector, ya que tanto la ley 24.076 (marco regulatorio del gas) en su art. 34, como la ley 24.065 (marco regulatorio de la energía eléctrica) en sus arts. 30

al 33, establecen la prohibición de desempeñar esos roles en forma conjunta.

Lo expuesto es importante, porque necesitamos inversión y la misma no vendrá en los volúmenes necesarios si la seguridad jurídica en el sector es precaria y no se respetan las reglas de juego que fijan las normas regulatorias.

El artículo 2º del proyecto confiere a Energía Argentina S.A. “la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones”.

Se altera así el sistema de Ley 17.319 la cual establece estrictos mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones, los que, por esta ley, la empresa sortearía. La Ley de Hidrocarburos establece además la obligación de efectuar “dentro de plazos razonables... las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión”, y fija límites precisos en cuanto a la extensión territorial máxima de estos permisos y concesiones, y al plazo por el que se otorgan los mismos.

Ninguno de estos requisitos se le está exigiendo a la empresa que se pretende crear. No es este tampoco el caso de las empresas estatales a que se refiere el art. 11 de la Ley 17.319, para las cuales se podía “reservar” ciertas áreas. Aquí se otorgan “ex lege” permisos y concesiones sobre todas las áreas sujetas a la jurisdicción nacional, con lo cual se confunde a la sociedad con el Estado mismo.

Es mucho más prolijo y hace a la seguridad jurídica, respetar la Ley 17.319 en lo atinente a permisos y concesiones. Requisitos tales como programas de inversión, pago de regalías, autoridad de aplicación, se cumplirían así acabadamente, en una sociedad con treinta y cinco por ciento de capital privado.

En lo que respecta al mar territorial argentino, cabe consignar que hasta las 12 millas de las líneas de base, son las provincias ribereñas quienes tienen el dominio originario de los hidrocarburos.

El art. 8º también confunde el Estado con una sociedad comercial en la que interviene el capital privado. El mismo atribuye a ENARSA la función de “crear, administrar, gestionar, operar y gerenciar una base de datos integral de los hidrocarburos, siendo obligación de los concesionarios y permisionarios suministrar la información que obtengan”.

Esta es otra función que corresponde específicamente al Estado. Por otra parte, no puede perderse de vista que los datos relacionados con la existencia de hidrocarburos, sus condiciones y posibilidades de extracción, etcétera, constituyen información sensible que las empresas adquieren mediante inversiones muy importantes de fondos propios. Por ende, exigirles que entreguen esa información a la empresa que se crea no sólo implica dar a esta última una posición preeminente que no se condice con la participación de un treinta y cinco por ciento de capital privado, sino que además configura un verdadero despojo material, que viola el derecho a la propiedad de los que invirtieron para hacer estudios.

Solo el Estado, en ejercicio de su función regulatoria, puede requerir información a las empresas del sector.

En lo que respecta al capital social no se lo precisa, limitándose a expresar el art. 9º: “Autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social”.

Creemos que esta delegación absolutamente abierta no corresponde. Si se van a reasignar recursos de otras finalidades, el Congreso debe intervenir.

En síntesis, el proyecto de ley de creación de ENARSA no respeta las disposiciones de la Ley Nº 19.550 de Sociedades, ni las Leyes Nº 24.065 y 25.790 que fijan los marcos regulatorios del sector, tampoco la Ley Nº 17.319, no se precisa el capital social y se confunde el Estado con una sociedad en la que participan particulares, razones por las que sumadas a lo expuesto al principio no consideramos adecuado el proyecto.

Ricardo Gómez Díez